

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 16° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6200-2022
CARATULADO : GÁLVEZ/FISCO DE CHILE - C.D.E.

Santiago, veinte de Enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que, con fecha 28 de junio de dos mil veintidós, comparece don Luís Pérez Camousseight, abogado, domiciliado en calle Doctór Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en representación de doña María Isabel Gálvez Águila, dueña de casa, domiciliada en calle 13 ½ Norte, tres y cuatro C N° 234, población Villa La Paz, Talca, quien deduce acción de indemnización de perjuicios en contra el Fisco de Chile, representado legalmente por don Juan Antonio Peribonio Poduje, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1225, piso 4, Santiago.

Que, con fecha 9 de agosto de dos mil veintidós, el apoderado de la demandada contesta la demanda.

Que, con fecha 19 de agosto de dos mil veintidós, se tiene por evacuado el trámite de réplica y se da traslado para dúplica.

Que, con fecha 5 de septiembre de dos mil veintidós, se tiene por evacuado el trámite de dúplica y se recibe la causa a prueba.

Que, con fecha 12 de enero de dos mil veintitrés, se cita a las partes a oír sentencia.

Considerando:

Primero: Que, comparece don Luís Pérez Camousseight en representación de doña María Isabel Gálvez Águila, quien deduce acción de indemnización de perjuicios en contra el Fisco de Chile, ya individualizados.



Foja: 1

Funda su pretensión en que su representada figura en el registro de la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 2 bajo el número 3346.

En este sentido, relata que fue detenida de manera ilegal por la Policía de Investigaciones en su lugar de trabajo, en calle 4 Norte 8 y 9 Oriente de la ciudad de Talca con fecha 5 de abril de mil novecientos ochenta y ocho. El fundamento de dicho actuar, se debe a que en ese momento mantenía una relación de pareja desde hace años con un miembro del partido comunista.

Una vez detenida, fue trasladada al cuartel de la Policía de Investigaciones, donde, incomunicada, fue objeto de interrogatorio por sus captores, además de distintas vejaciones sexuales.

Luego, fue trasladada a la comisaría de Talca, en donde se practicaron distintas torturas psicológicas. Pasó además por el centro de detención Buen Pastor y recayó nuevamente en dicha cárcel, donde continuó incomunicada hasta el día 10 de abril de mil novecientos ochenta y ocho.

Continúa, señalando que según la evolución de daño realizada a su representada por el Prais del Maule, entre los meses de noviembre de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, dan cuenta de que su representada presentó secuelas producto de los hechos vividos.

Así, en la actualidad vive con las secuelas tanto psíquicas, físicas y morales del daño producido por el Estado de Chile, siendo los mismos de carácter permanente, siendo precisamente estos los que se pretende indemnizar, avaluándolos en la suma de \$200.000.000 pesos.

Ahonda, señalando que la demandada es responsable de los hechos anteriormente descritos. Incluso, en distintos instrumentos ha reconocido de manera expresa su responsabilidad, como por ejemplo en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación e Informe Sobre Prisión Política y Tortura.



Foja: 1

Señala además que a nivel constitucional, independiente de cuál sea la carta magna, la responsabilidad del Estado queda consagrada como principio general de reparación integral por el daño generado.

Incluso, señala que la normativa internacional, suscrita por el Estado de Chile, igualmente obligaría a la demandada a indemnizar, dado que el actuar de este se enmarca dentro de un contexto de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. De este modo, toda persona víctima de una violación a los derechos humanos tiene derecho a una reparación integral.

Previas citas legales, pide tener por deducida acción de indemnización de perjuicios en contra el Fisco de Chile, ya individualizado, y en definitiva, se condene a la indemnización de su representada por la suma de \$200.000.000 pesos, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo de esta, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, comparece la abogada Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, al contestar la demanda principal, solicita el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone a continuación.

Opone en primer lugar la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizado el demandante.

Reparaciones mediante transferencia directa de dinero y pensiones.

En tal sentido manifiesta que las indemnizaciones que el demandante solicita se desenvuelven en el marco de las infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. En efecto, la Ley Nro. 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante reparaciones mediante transferencias directas de dinero, mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y reparaciones simbólicas,



Foja: 1

lo que permite que numerosas víctimas obtengan una reparación monetaria. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos, haciéndose referencia en la discusión de dicha ley incluso al objeto indemnizatorio de reparación moral y patrimonial de aquella.

Hace presente que a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-, por concepto de reparaciones de daño moral ocasionado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Agrega que estas pensiones han sido una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, además de la indicada pensión, la Ley 19.123 consagra además transferencias directas de dinero que se han creado con idénticos fines reparatorios.

Reparaciones específicas.

Expresa que el demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes números 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Indica en primer término que la ley 19.992 (y sus modificaciones) estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, todos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Agrega que así, se estableció para quienes figuraran en dicha nómina una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Consigna adicionalmente, se concedió a los beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Precisa que el PRAIS cuenta con un equipo compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras,



Foja: 1

generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Menciona que también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, junto con beneficios en vivienda, correspondiente al acceso a subsidios para vivienda.

Reparaciones simbólicas.

Expone que al igual que en todos los demás procesos de Justicia Transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino que precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral. En este sentido refiere una serie de reparaciones de carácter simbólico en las que ha incurrido el Estado (Memorial del Cementerio General, establecimiento del Día del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros).

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De lo expresado anteriormente concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera del Estado que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.



Foja: 1

Así las cosas, tanto la indemnización demandada como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones. Cita jurisprudencia de nuestro Tribunales Superiores de Justicia en apoyo de su posición.

En segundo lugar opone excepción de prescripción extintiva.

En subsidio opone la prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios deducidas en este proceso civil con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código. Solicita que, por encontrarse prescritas éstas, se rechacen las acciones resarcitorias en todas sus partes.

Esgrime que conforme al relato efectuado por los demandantes, as detenciones, privaciones de libertad y torturas se produjeron en un lapso de tiempo que va entre noviembre de 1974 y octubre de 1975.

Razona expresando que incluso entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 15 de junio de 2018, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, por lo que opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en la norma recién citada.

Señala que en subsidio de la excepción de prescripción recientemente referida, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción indemnizatoria, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.



Foja: 1

Refiere finalmente sobre la alegación de los demandantes en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria de autos, indica que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, no es factible, a su juicio, apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Cita variada jurisprudencia al respecto.

Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria

Que en la especie se han ejercido acciones de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que las acciones impetradas pertenecen -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Agrega que en base a normas contenidas en el Derecho Internacional, que no hay norma expresa de derecho internacional de los derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar

En cuanto al daño e indemnización reclamada.

Interpone en subsidio de las defensas y excepciones reproducidas anteriormente, las siguientes alegaciones respecto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Refiere que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino que sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Enfatiza en que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la



Foja: 1

cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberán ser justificadas íntegramente.

En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los beneficios extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad era precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Improcedencia del pago de reajustes e intereses.

Finaliza su contestación señalando que no procede el cobro de reajustes e intereses, en el caso de que la sentencia que se dicte en autos acoja la demanda y establezca esa obligación, solicitando que de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

En razón de lo expuesto previamente, pide tener por contestada la demanda y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Tercero: Que, en su escrito de réplica, la actora agrega los siguientes elementos.

En un primer momento, señala que la demandada no discute la concurrencia de los hechos, no existiendo discusión a dicho respecto.



Foja: 1

Ahora bien, señala que las reparaciones realizadas por el Fisco, de carácter meramente asistencial, no resultan suficientes para indemnizar de manera integral el daño sufrido por su patrocinada. Incluso, así lo ha entendido la jurisprudencia en distintas oportunidades.

En cuanto a la prescripción, argumenta que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia ha sido clara al fijar que, tratándose de un delito de lesa humanidad, la acción de indemnización de perjuicios es de carácter imprescriptible.

Incluso, las distintas fuentes internacionales fijan el mismo carácter a este tipo de acciones.

Cuarto: Que, el Fisco de Chile en su escrito de dúplica reitera lo ya señalado en su escrito de contestación.

Quinto: Que, a fin de acreditar sus dichos, la actora acompaña en tanto prueba instrumental los siguientes documentos:

I.- Copia de artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental” elaborado por la Vicaría de la Solidaridad.

II.- Copia de artículo titulado “Algunos problemas de Salud Mental Detectados por Equipo Psicológico-Psiquiátrico” elaborado por la Vicaría de la Solidaridad.

III.- Copia de artículo titulado “Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos en 1980. Su Impacto Psicológico” elaborado por la Vicaría de la Solidaridad.

IV.- Copia de artículo titulado “Trabajo Social. Una Experiencia Solidaria en la Promoción de la Defensa de los Derechos Humanos” elaborado por la Vicaría de la Solidaridad.

V.- Copia de artículo titulado “Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos” elaborado por la Vicaría de la Solidaridad.

VI.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1.



Foja: 1

VII.- Nomina de Presos Políticos y Torturados Comisión Valech 2.

VIII.- Copia autorizada de la carpeta de doña María Isabel Gálvez, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

IX.- Certificado Médico Integral de doña María Isabel Gálvez, emitido por el Prais del Maule con fecha 12 de febrero de dos mil veintidós.

Sexto: Que, a fin de acreditar sus dichos, la demandada acompaña en tanto prueba instrumental copia de Oficio del Instituto de Previsión Social, de fecha 7 de septiembre de dos mil veintidós.

Este, informa los beneficios económicos percibidos por la demandante de autos en virtud de la las leyes de reparación, a fecha de agosto de dos mil veintidós, se avalúan en la suma de \$24.148.151 pesos.

Séptimo: Que, atendido el mérito de los antecedentes que constan en autos, esto es lo expresado por ambas partes en la etapa de discusión y la prueba rendida, se tienen por acreditados lo siguientes hechos:

Que, doña María Isabel Gálvez Águila fue detenida con fecha 5 de abril de mil novecientos ochenta y ocho por efectivos de la Policía de Investigaciones, siendo trasladada a dicho cuartel, en donde se le realizarían interrogaciones y distintas vejaciones sexuales.

Asimismo, se acredita que fue llevada a distintos centros de detención, donde se continuó con una práctica de tortura psicológica, recuperando su libertad con fecha 10 de abril de mil novecientos ochenta y ocho.

Además de lo anterior, y de acuerdo a la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 2, la actora figura en el numeral 3346, quedando así acreditada su calidad de víctima.

I.- En cuanto a la excepción de reparación integral interpuesta por el Fisco.

Octavo: Que, las disposiciones legales invocadas por el Fisco, entre ellas las Leyes N° 19.123 ,19.992 y 20.874 como fundamento de su alegación en cuanto a que los perjuicios reclamados ya han sido reparados, denominadas también “Leyes de Reparación”, si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de su deber de reparar el daño causado a las



Foja: 1

víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a sus familiares directos, en ningún sentido las reparaciones materiales y simbólicas en ellas contenidas, a juicio de esta sentenciadora, resultan incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios, de considerarse que concurren los requisitos para ello.

A mayor abundamiento que de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 19.123, se establece una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de la violencia política, que no contempla la limitación pretendida por la demandada, debiendo tenerse presente, a mayor abundamiento, que la propia ley, también conocida como Ley de Reparación, ha ido ampliando no sólo los beneficios otorgados sino también la calidad de beneficiarios a lo largo del tiempo.

En el mismo sentido, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta magistratura- con una reparación meramente simbólica.

Además, la indicada normativa y cuerpos legales en general citados tampoco establecen renuncia, prohibición o incompatibilidad alguna con una eventual reparación monetaria que tenga por objeto la reparación integral del daño padecido, razones todas ellas que en consecuencia llevan a esta magistratura a rechazar la alegada excepción de reparación.

En cuanto a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco.

Noveno: Que, de forma previa a entrar al fondo del asunto que ha sido sometido a conocimiento de esta magistratura, cabe pronunciarse sobre la excepción de prescripción interpuesta por el Fisco.



Foja: 1

Décimo: Que, en este sentido cabe reiterar que la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad.

Undécimo: Que, al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso significaría una negación de Derechos Fundamentales, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que: *“en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados,...si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna”* (Rol CS 3573-2012).

Todas estas reflexiones conducen en consecuencia al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada.

III. En cuanto a la pretensión indemnizatoria.



Foja: 1

Duodécimo: Que, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada y que conducen a establecer la responsabilidad del Estado en las detenciones, privaciones de libertad, torturas y actos violentos practicados a doña María Isabel Gálvez Águila, al margen de todo proceso legal, por agentes del Estado, considerando la normativa aplicable.

Así, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949.

Décimo tercero: Que, establecida de forma manifiesta la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor; así el daño moral tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

Décimo cuarto: Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral reclamado, la actora presentó certificado Clínico Integral del Prais Región del Maule, emitido con fecha 14 de febrero de dos mil veintidós.



Foja: 1

En este, dentro de sus conclusiones, se encuentra que la actora vivió una experiencia de represión política por agentes del Estado de Chile, que se radican en la persona como una de carácter muy traumática y amenazante.

Ahonda, señalando que representa un verdadero quiebre a nivel emocional, familiar y social, los cuales quedan reflejados en el Trastorno de Estrés Postraumático Crónico que padece.

Ahora bien, no obstante la prueba rendida y analizada precedentemente que resulta satisfactoria para acreditar el daño moral alegado, la existencia de dicho daño moral en este caso incluso pudo presumirse atendida la gravedad del hecho ilícito, sus consecuencias y las circunstancias que lo rodearon.

Décimo quinto: Que, en la determinación del quantum de la indemnización, cabe señalar que en la especie se configura el daño moral padecido por la demandante por los motivos expresados en el considerando anterior, razón por la que pese a lo complejo de calcular y cuantificar este tipo de daño, esta Juez lo regula prudencialmente en la cantidad de \$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

Décimo sexto: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada.

Décimo séptimo: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistratura que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47 y siguientes, 222 , 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve que:

I.- Se rechazan las excepciones de reparación y de prescripción deducidas por el demandado.



Foja: 1

II.- Se acoge, parcialmente, la demanda deducida a lo principal del escrito de fecha 13 de julio de 2021 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma total de \$ 50.000.000 (cincuenta millones) a favor de doña María Isabel Gálvez Águila.

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° C-6200-2022.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinte de Enero de dos mil veintitrés.**

